



Asamblea General

Distr. general
9 de julio de 2012
Español
Original: inglés

Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional

JURISPRUDENCIA DE LOS TRIBUNALES SOBRE TEXTOS DE LA CNUDMI (CLOUT)

Índice

	<i>Página</i>
Casos relativos a la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías (CIM)	3
Caso 1163: CIM [1; 25]; 58; 73 3); 74; [77]; 88 - <i>República Popular China: China International Economic & Trade Arbitration Commission [CIETAC] (7 de abril de 2005)</i>	3
Caso 1164: CIM 1; 6; [9; 34; 74] - <i>República Popular China: China International Economic & Trade Arbitration Commission [CIETAC] (10 de diciembre de 2003)</i>	4
Caso 1165: CIM 18 1); 19; [29; 53]; 74; 78 - <i>República Popular China: China International Economic & Trade Arbitration Commission [CIETAC] (18 de abril de 2003)</i>	5
Caso 1166: CIM [8]; 30; 38 1); 39 1); 45 1) b); [50]; 74; [88] - <i>República Popular China: China International Economic & Trade Arbitration Commission [CIETAC] (18 de diciembre de 2002)</i>	6
Caso 1167: CIM [1]; 8 3); [47; 49]; 64 1) a); [74]; [75] - <i>República Popular China: China International Economic & Trade Arbitration Commission [CIETAC], Shenzhen Commission (8 de noviembre de 2002)</i>	7
Caso 1168: CIM [1; 25; 38]; 46 3); [73; 74; 77; 78] - <i>República Popular China: China International Economic & Trade Arbitration Commission [CIETAC] (31 de enero de 2000)</i> ...	9
Caso 1169: CIM [1; 35]; 53; 74; [78] - <i>República Popular China: China International Economic & Trade Arbitration Commission [CIETAC] (26 de noviembre de 1998)</i>	11
Caso 1170: [1; 6]; 11; [12]; 29; 45; 49; 74; [79 2); 96] - <i>República Popular China: China International Economic & Trade Arbitration Commission [CIETAC] (31 de diciembre de 1997)</i> ...	12



Introducción

La presente recopilación de resúmenes forma parte del sistema de reunión y difusión de información sobre fallos judiciales y laudos arbitrales basados en las convenciones y leyes modelo dimanantes de la labor de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). Su objetivo es facilitar la interpretación uniforme de esos textos jurídicos con arreglo a normas internacionales, que estén en consonancia con el carácter internacional de los textos, en oposición a los conceptos y usos jurídicos de ámbito estrictamente nacional. Para obtener información más detallada acerca de las características y de la utilización de este sistema, consúltese la Guía del Usuario (A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/REV.1). Los documentos en que se resume la jurisprudencia basada en textos de la CNUDMI figuran en el sitio de su secretaría en Internet (www.uncitral.org/clout/showSearchDocument.do).

En la primera página de cada recopilación de esa jurisprudencia (serie denominada CLOUT) figura un índice en que se enumeran las referencias completas de cada caso reseñado en el documento, junto con los artículos de cada texto de la CNUDMI que el tribunal estatal o arbitral ha interpretado o al que se ha remitido. En el encabezamiento de cada caso se indican la dirección de Internet (URL) donde figura el texto completo de las decisiones en su idioma original, y las direcciones de Internet en que se han consignado las traducciones a uno o más idiomas oficiales de las Naciones Unidas, cuando están disponibles (se ruega tomar nota de que las remisiones a sitios que no sean sitios oficiales de las Naciones Unidas no implican que la Organización o la CNUDMI aprueben el contenido de dichos sitios; además, los sitios de Internet cambian con frecuencia; todas las direcciones de Internet enunciadas en el presente documento son válidas en la fecha de su presentación). Los resúmenes de los casos que interpretan la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional incluyen palabras clave de referencia que están en consonancia con las consignadas en el Tesauro relativo a la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional, preparado por la secretaría de la Comisión en consulta con los corresponsales nacionales. Los resúmenes de los casos en los que se interpreta la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza también incluyen palabras clave de referencia. Se puede realizar una búsqueda de los resúmenes en la base de datos disponible en el sitio de la CNUDMI en Internet por medio de palabras clave de identificación, a saber: país, texto legislativo, número de caso en la serie CLOUT, número de documento de dicha serie, fecha de la decisión o mediante cualquier combinación de estos criterios de búsqueda.

Los resúmenes han sido preparados por los corresponsales nacionales designados por sus respectivos gobiernos, o por colaboradores particulares; en casos excepcionales pueden ser preparados por la propia secretaría de la CNUDMI. Cabe señalar que ni los corresponsales nacionales, ni nadie relacionado, directa o indirectamente, con el funcionamiento del sistema asumen responsabilidad alguna por cualquier error u omisión, o toda otra deficiencia.

Copyright © United Nations 2012

Impreso en Austria

Reservados todos los derechos. El presente documento puede reproducirse en su totalidad o en parte solicitando permiso a la Secretaría de la Junta de Publicaciones de las Naciones Unidas, Sede de las Naciones Unidas, Nueva York, N.Y. 10017, Estados Unidos de América. Las autoridades y las instituciones públicas pueden reproducir el documento en su totalidad o en parte sin necesidad de solicitar autorización, pero se ruega que lo comuniquen a las Naciones Unidas.

Casos relativos a la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías (CIM)

Caso 1163: CIM [1; 25]; 58; 73 3); 74; [77]; 88

República Popular China: China International Economic & Trade Arbitration Commission [CIETAC]

7 de abril de 2005

Original en chino

Publicado en inglés: <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050407c1.html>

Resumen preparado por Aaron Bogatin

Se celebró un contrato entre un vendedor de Singapur y un comprador de China para la compra de borra de desmotadora de algodón, que se enviaría en dos entregas.

Al recibir la segunda entrega, el comprador inspeccionó la mercadería y comprobó que, en su mayor parte, no se conformaba a la muestra original recibida y, por tanto, no era conforme con el contrato (artículo 35 2) c) de la CIM). Cuando el comprador trató de devolver la mercadería defectuosa al vendedor, éste lo remitió a su proveedor para recibir una indemnización. Como el problema tardaba en resolverse y el precio del algodón estaba en baja, el comprador decidió reducir los daños y perjuicios y revender parte de la mercadería utilizable.

El contrato no especificaba el derecho aplicable, de modo que el Tribunal Arbitral decidió que procedía aplicar la CIM puesto que los establecimientos del comprador y del vendedor estaban en Estados contratantes de la CIM. En cuanto al fondo de la cuestión, el Tribunal sostuvo que la aceptación de la primera entrega por el comprador no impedía que éste declarase resuelto el contrato en el momento de producirse la segunda entrega. Las dos entregas eran “interdependientes”, de modo que ninguna podía destinarse al uso previsto por las partes (Artículo 73 3) de la CIM).

El Tribunal también consideró que la reventa de parte de la mercadería estaba permitida debido a que el vendedor se había “demorado excesivamente” en aceptar la devolución (artículo 88 de la CIM). El Tribunal declaró asimismo que el vendedor era responsable del pago al comprador de indemnización por daños y perjuicios. La cantidad de mercadería no conforme era tan grande que se estimó que bastaba para considerar que había un incumplimiento esencial del contrato, lo cual permitía que el comprador lo declarase resuelto. Tras reducir la indemnización del comprador por concepto de lucro cesante, se consideró que los daños previsibles consistían en la diferencia entre el precio de compra y el precio de reventa más los gastos de almacenamiento y de sobrestadía, así como el pago de otros derechos (artículo 74 de la CIM).

Refiriéndose al hecho de que la relación contractual del comprador era con el vendedor, el Tribunal sostuvo que el comprador sólo podía exigir indemnización al vendedor. Sin embargo, éste tenía derecho a obtener indemnización de su proveedor después de indemnizar al comprador.

Caso 1164: CIM 1; 6; [9; 34; 74]

República Popular China: China International Economic & Trade Arbitration Commission [CIETAC]

10 de diciembre de 2003

Original en chino

Publicado en inglés: <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031210c1.html>

Resumen preparado por Ashraf Shannak

El demandante (comprador), una empresa de los Estados Unidos (EE.UU.), celebró un contrato con el demandado (vendedor), una empresa china, para la compra de picos agrícolas. Estos aperos figuraban en la lista de productos objeto de dumping que preparan los EE.UU. Existían muy pocas empresas chinas cuyos productos estaban exentos del pago del derecho anti-dumping establecido por el Servicio de Aduanas de los EE.UU. y la empresa del vendedor era una de ellas. Como resultado de dicha exención y basándose en la confirmación por parte del gerente de la empresa vendedora al comprador de que el vendedor estaba familiarizado con los procedimientos de exportación de picos al mercado de los EE.UU., el comprador concertó un contrato con el vendedor. Los procedimientos del Gobierno de los EE.UU. preveían la presentación, dentro de determinado plazo, de una solicitud de examen con respecto al derecho anti-dumping acompañada de los documentos pertinentes. Tres años después de haber recibido los picos, el comprador fue notificado por el Servicio de Aduanas de los EE.UU. que debía pagar un derecho anti-dumping de 98,77%, más intereses, por no haberse presentado la solicitud de examen dentro del plazo requerido, y que era obligación del vendedor presentar dicha solicitud. El comprador pagó el derecho y pidió su reembolso al vendedor, que se negó a hacerlo. El comprador sometió entonces el asunto a arbitraje.

Las partes no habían estipulado en su contrato cuál sería el derecho aplicable. Puesto que las partes tenían sus establecimientos en dos Estados contratantes de la CIM, y no habían excluido la aplicabilidad de la Convención, el Tribunal Arbitral resolvió que procedía aplicar ese instrumento con arreglo a los artículos 1 y 6 de la Convención.

El Tribunal llegó a la conclusión de que el vendedor no había presentado la solicitud a las autoridades aduaneras de los EE.UU. a tiempo, según lo convenido entre las partes, y de que el vendedor tendría que haber estado familiarizado con el trámite a seguir, puesto que lo había hecho en varias oportunidades anteriores. Esa había sido la práctica entre el vendedor y el comprador. Además, la presentación de la solicitud de examen era una obligación del vendedor. El Tribunal Arbitral no aceptó el argumento del vendedor de que la presentación de una solicitud no era una condición previa para la celebración del contrato y de que el vendedor tenía derecho a decidir posteriormente si presentaría o no la solicitud. A juicio del Tribunal, si el vendedor no estaba en condiciones de realizar ese trámite, no estaría en condiciones de hacer que los compradores importasen sus productos a los Estados Unidos. Había sido precisamente la experiencia del vendedor en cuanto a la exportación al mercado de los EE.UU. la principal razón para que el comprador celebrase el contrato.

El vendedor adujo además que el comprador no había enviado una notificación con la fecha de la llegada del buque. El Tribunal Arbitral declaró que “se impuso el derecho anti-dumping, más el pago de intereses, a la mercadería ... debido a las omisiones y errores del vendedor, que no guardaban ninguna relación con el hecho

de que el comprador no hubiera notificado la fecha de arribo de la embarcación”. El comprador no tenía ninguna obligación de enviar una notificación de la fecha de llegada de la embarcación al vendedor debido a que el contrato estipulaba una entrega CFR (costo y flete) y, de acuerdo con INCOTERMS 2000, el comprador no tenía ninguna obligación de enviar dicha notificación. Además, en el contrato no se estipulaba que hubiera que mandar dicha notificación y la práctica comercial no exigía que el comprador informase al vendedor acerca de la fecha de arribo.

El Tribunal sostuvo que el vendedor había dispuesto de suficiente tiempo para presentar la solicitud al Servicio de Aduanas de los EE.UU. en el plazo estipulado y, por consiguiente, resolvió que debía pagar daños y perjuicios al comprador.

Caso 1165: CIM 18 1); 19; [29; 53]; 74; 78

República Popular China: China International Economic & Trade Arbitration Commission [CIETAC]

18 de abril de 2003

Original en chino

Publicado en inglés: <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030408cl.html>

Resumen preparado por Aaron Bogatin

Las partes celebraron un contrato para la entrega de un reactivo de desulfuración. La mercadería se enviaría en tres entregas (entre julio y septiembre de 2001) y el vendedor se encargaría de organizar el transporte.

Pese a que la mercadería fue entregada en el puerto y dentro de los plazos convenidos, el comprador sólo efectuó un pago parcial. El vendedor interpuso un recurso de arbitraje y reclamó el pago de la suma adeudada, más los intereses.

En su defensa, el comprador afirmó que no había pagado la suma total porque, en lugar de tres entregas de cantidades iguales, había habido doce entregas de la mercadería de distintos pesos netos. Por consiguiente, en un acuerdo subsiguiente (“el Acuerdo”) concertado con el vendedor en marzo de 2002 se estipulaba que el vendedor efectuaría nuevas entregas a cambio de los pagos pendientes del comprador. En virtud de este Acuerdo se reconstituía la relación contractual entre las partes. Puesto que el vendedor no entregó la mercadería adicional, el comprador no estaba obligado a cumplir su obligación de pago.

El vendedor sostuvo que el derecho aplicable debía ser el derecho chino, puesto que el contrato se había celebrado y ejecutado en China y el lugar del arbitraje también era China. Alegó asimismo que las condiciones del contrato no estipulaban específicamente que habría solamente tres entregas de mercadería. El vendedor entregó exactamente la cantidad de mercadería requerida en el plazo fijado; ello exigió simplemente un número mayor de entregas: la cláusula 12 del contrato justificaba esta opinión. El Acuerdo se había concertado solamente para que el comprador no siguiera incumpliendo el contrato. No modificaba las condiciones del contrato original y no podía utilizarse como excusa para el incumplimiento por el comprador del contrato original. El vendedor no había perdido su derecho de exigir al comprador el pago de daños y perjuicios.

El comprador respondió a estos argumentos aduciendo que la CIM constituía el derecho aplicable, ya que ambas partes tenían sus establecimientos en Estados contratantes de la Convención; el Acuerdo no constituía un contrato independiente

sino que modificaba las condiciones de pago estipuladas en el contrato original y, dadas las nuevas condiciones de pago, la fecha para calcular los intereses devengados debería fijarse en abril de 2002.

Puesto que el lugar del arbitraje estaba en China, el Tribunal Arbitral decidió aplicar las normas de conflicto del derecho chino a fin de determinar cuál era el derecho aplicable al litigio. Con arreglo a estas normas, el Tribunal concluyó que procedía aplicar directamente al caso el derecho chino cuando ello era conforme a la CIM. La Convención debía aplicarse si el derecho chino aplicable estaba en conflicto con la Convención, en tanto que cuando ni el derecho chino ni la CIM tuvieran disposiciones pertinentes, debería seguirse la práctica internacional.

En cuanto al fondo de la cuestión, el Tribunal determinó que el vendedor no había incumplido el contrato al enviar la mercadería en más de tres entregas, de modo que el comprador estaba obligado a pagar el resto del precio del contrato. El Acuerdo no había sido sino una forma de asegurar el cumplimiento con arreglo al contrato original y no modificaba los derechos y obligaciones originales de las partes de modo sustantivo. No “reemplazaba el contrato [original]”, sino que constituía una enmienda. Sin embargo, de conformidad con el Acuerdo, que establecía una nueva fecha con respecto al pago pendiente y el artículo 78 de la CIM, determinó que los intereses adeudados debían calcularse a partir de abril de 2002.

Caso 1166: CIM [8]; 30; 38 1); 39 1); 45 1) b); [50]; 74; [88]

República Popular China: China International Economic & Trade Arbitration Commission [CIETAC]

18 de diciembre de 2002

Original en chino

Publicado en inglés: <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021218c1.html>

Resumen preparado por Aaron Bogatin

Un comprador alemán y un vendedor chino celebraron un contrato para la entrega de 105 cajones de salchichas de carne de cerdo en Hamburgo (Alemania) a más tardar el 20 de julio de 2000. Después de recibir la mercadería el 19 de octubre de 2000, el comprador se quejó del retraso en la entrega así como de la calidad de la mercadería. En respuesta a esta última queja, el vendedor convino en trasladarse por avión a Alemania para efectuar una inspección conjunta de la mercadería. Poco después de la inspección conjunta, la Dirección de Veterinaria de Alemania selló 88 de los cajones y ordenó al comprador que los destruyera. Un día después de ser emitida la orden por la Dirección, el vendedor pidió que se enviaran de vuelta a China los 105 cajones para ser examinados nuevamente por la Oficina de Inspección de Productos de Importación y Exportación. El comprador contestó que no se podía satisfacer esa petición, puesto que 88 de los cajones habían sido sellados y debían destruirse. El vendedor pidió al comprador por fax que tratara de convencer a la Dirección de Veterinaria de que no destruyera los 88 cajones sellados y declaraba que asumiría la responsabilidad de los gastos de su transporte marítimo a China, así como de algunas pérdidas del comprador. Pese a ello, los 88 cajones fueron destruidos.

El vendedor sometió el asunto a arbitraje. Sostuvo que debido a factores tales como los distintos números de serie observados en los cajones y diferentes procedimientos de salazón, existían suficientes pruebas de que los cajones contaminados no eran los

entregados por el vendedor. Además, presentó un certificado en el que se documentaba la conformidad de la mercadería expedido por la Dirección China de Inspección y Cuarentena de Productos de Importación y Exportación en julio de 2000.

Si bien el contrato no especificaba el derecho aplicable, las dos partes tenían sus establecimientos en Estados contratantes de la CIM y ambos pidieron que se aplicase la CIM; el Tribunal Arbitral estuvo de acuerdo. En su decisión en cuanto al fondo, el Tribunal sostuvo que el visto bueno estampado por el comprador al pie del fax enviado por el vendedor en el que se modificaba la fecha de entrega equivalía a una aceptación de la nueva fecha de entrega y no era simplemente señal de que el fax había sido recibido. En consecuencia, no se aceptó la afirmación del comprador de que la mercadería había sido entregada después del plazo fijado.

El Tribunal desestimó la afirmación del vendedor de que la mercadería sellada por la Dirección de Veterinaria no era la que había enviado el vendedor, pues antes del arbitraje este nunca había planteado la cuestión. Además, el comprador aportó pruebas de descargo.

El Tribunal también declaró que los 88 cajones de mercadería no eran conformes al contrato. La inspección efectuada en China, que tuvo lugar seis semanas antes de ser despachada la mercadería, no era suficiente para refutarlo. El comprador inspeccionó la mercadería e hizo constar su falta de conformidad en un plazo razonable (artículos 38 y 39 de la CIM). La eliminación por el comprador de los 88 cajones con mercadería no conforme al contrato fue una decisión del comprador justificada debido a que las instrucciones impartidas por la Dirección de Veterinaria alemana constituían, de hecho, una orden administrativa. Por consiguiente, el vendedor no tenía ningún derecho a reclamar el pago de los gastos de viaje a Alemania para la inspección conjunta de la mercadería. Sin embargo, con respecto a los 17 cajones restantes, no se presentó ninguna prueba acerca de su falta de conformidad. Por consiguiente, el comprador debía pagar el precio estipulado.

El comprador también había reclamado el pago de los gastos efectuados por la falta de conformidad de los 88 cajones, que incluían el alquiler de un segundo almacén para depositar la mercadería en descomposición y gastos de eliminación y de transporte. Sin embargo, puesto que el comprador no presentó ninguna prueba en cuanto a estos gastos salvo los de eliminación, no se le permitió que reclamara ningún otro pago fuera de este último (artículo 45 1) de la CIM).

Caso 1167: CIM [1]; 8 3); [47; 49]; 64 1) a); [74]; [75]

República Popular China: China International Economic & Trade Arbitration Commission [CIETAC], Shenzhen Commission

8 de noviembre de 2002

Original en chino

Publicado en inglés: <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021108c1.html>

Resumen preparado por Zhongjie Shao

Un comprador alemán (demandante) celebró dos contratos con un vendedor chino (demandado) para la compra de espárragos en lata. Celebrados los contratos, el comprador emitió dos cartas de crédito al vendedor por la suma total de la compra. Sin embargo, pese a reiteradas peticiones, el vendedor se negó a entregar la

mercadería aduciendo que el precio del producto había aumentado. En definitiva, el comprador se vio obligado a adquirir productos sustitutivos de otro proveedor. En vista de la persistente negativa del vendedor a indemnizar al comprador por las pérdidas sufridas, este último sometió el asunto a arbitraje.

Como en ninguno de los dos contratos se especificaba el derecho aplicable, el Tribunal Arbitral estimó que, puesto que el lugar de la formación y cumplimiento de los contratos estaba en China y lo mismo valía para el establecimiento del vendedor, China era el Estado que tenía la relación más estrecha con los contratos. En consecuencia, el derecho interno chino debía ser el derecho aplicable. Por otra parte, los establecimientos del comprador y del vendedor estaban en Estados contratantes de la CIM, por lo cual debía aplicarse la Convención si existía alguna contradicción con el derecho interno chino.

En la audiencia celebrada en el curso del arbitraje, el vendedor sostuvo que el comprador se había comprometido a pagar una suma razonable de dinero por el precio de mercaderías adquiridas el año anterior y no lo había hecho, lo cual constituía incumplimiento del contrato. Por consiguiente, el vendedor tenía derecho a declarar resueltos los contratos para la compraventa de espárragos envasados. En todo caso, estos contratos eran nulos debido a que el vicepresidente de la empresa vendedora que los había firmado no estaba autorizado por escrito para hacerlo en la fecha de la celebración de los contratos y a que ninguna de las partes había estampado su sello en dichos contratos. El Tribunal Arbitral no consideró que el vendedor tuviera derecho a declarar resueltos los contratos por estas razones y no estimó que los contratos fueran nulos.

El vendedor afirmó también que tenía derecho a declarar resueltos los contratos porque las condiciones de las cartas de crédito emitidas por el comprador hacían que resultara sumamente difícil para el vendedor negociar el pago de conformidad con lo estipulado en las cartas de crédito. Además, el comprador no había proporcionado etiquetas ni enviado el formulario de notificación de carga, lo cual había imposibilitado al vendedor la entrega de la mercadería. El Tribunal Arbitral tomó nota de la práctica seguida anteriormente por las dos partes y del hecho de que, antes del arbitraje, el vendedor no había planteado ninguna objeción respecto de las cartas de crédito y demás cuestiones mencionadas en el curso del arbitraje. El Tribunal llegó a la conclusión, por tanto, de que con arreglo al artículo 8 3) de la CIM, los requisitos relacionados con las cartas de crédito “no constituían la principal razón para que el vendedor se negara a efectuar la entrega de la mercadería”. El Tribunal rechazó asimismo el argumento del vendedor relativo a las etiquetas y la notificación de la carga, sosteniendo que el vendedor no tenía derecho a declarar resueltos los contratos y que el hecho de que el vendedor no hubiera entregado la mercadería constituía incumplimiento del contrato. Teniendo en cuenta lo dispuesto por el derecho de contratos de la República Popular China, el Tribunal consideró que el comprador tenía derecho a declarar resueltos los contratos y a adquirir productos sustitutivos y decidió en favor del comprador respecto de la mayoría de las pretensiones de indemnización por daños y perjuicios.

Caso 1168: CIM [1; 25; 38]; 46 3)¹; [73; 74; 77; 78]

República Popular China: China International Economic & Trade Arbitration Commission [CIETAC]

31 de enero de 2000

Original en chino

Publicado en chino: Zhong Guo Guo Ji Jing Ji Mao Yi Zhong Cai Wei Yuan Hui Cai Jue Shu Hui Bian [Recopilación de laudos arbitrales de la CIETAC] (mayo de 2004) vol. 2000, págs. 1291 a 1296

Publicado en inglés: <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000131c1.html>

Resumen preparado por MAA-Meihua Xu

Un vendedor chino celebró un contrato con un comprador alemán para la compraventa de ropa. Posteriormente, el comprador descubrió defectos en dos remesas de mercadería y planteó objeciones, pese a lo cual procedió a la venta de la mercadería. Al recibir la tercera remesa, el comprador se negó a aceptar la mercadería afirmando que existían problemas de calidad. El vendedor tuvo que ocuparse del transporte de devolución de la mercadería a China e inició un procedimiento de arbitraje en el que pidió al Tribunal que el comprador pagara el precio de las tres entregas, así como los intereses correspondientes más el costo del almacenamiento y del transporte de regreso de la tercera entrega. También se reclamaba el pago de la diferencia de precio entre el transporte aéreo y el marítimo.

El comprador respondió a estos argumentos aduciendo que, dado que la mercadería entregada tenía graves defectos, sus clientes se habían negado a aceptarla. Por consiguiente, el vendedor no había cumplido con su obligación de entregar la mercadería tal como se estipulaba en el contrato. El comprador había devuelto al vendedor 17 prendas de vestir para que éste las inspeccionara y el vendedor había confirmado que “hemos observado los problemas que usted menciona”. Además, a instancias del comprador, el vendedor había encargado a una empresa especializada la inspección del resto de la mercadería en los almacenes del comprador y en el informe de la inspección se indicaba que había graves defectos en la tela, color y confección. El vendedor reconoció la existencia de estos problemas en un fax enviado al comprador. Este sostuvo, por tanto, que su negativa a aceptar la tercera entrega era justificada y no constituía incumplimiento del contrato y, además, que el vendedor debía sufragar los gastos de la devolución de las prendas restantes depositadas en los almacenes del comprador.

El vendedor sostuvo, por su parte, que aunque el comprador había enviado muestras para probar los defectos de la mercadería, ni el origen de las muestras ni los procedimientos seguidos para obtenerlas podían demostrar objetivamente la calidad de la mercadería, debido a que las muestras habían sido reparadas y elegidas por el comprador sin la participación de ningún organismo de inspección independiente. En cuanto a la negativa del comprador a aceptar la tercera entrega, el vendedor sostuvo que esa mercadería se había entregado después de ser sometida a inspección por el comprador. La negativa del comprador a aceptarla, dos meses más tarde, cuando ya se había expedido la mercadería, había sido comunicada demasiado tarde. Además, puesto que el contrato estipulaba claramente que “el beneficiario estará

¹ El texto original parece referirse al artículo 48 de la CIM; sin embargo, se considera que se trata de un error tipográfico. Véase asimismo <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000131c1.html>.

autorizado a cargar en la carta de crédito la suma correspondiente a la diferencia entre el transporte aéreo y el marítimo”, la negativa del comprador a pagar dicha suma so pretexto de problemas de calidad constituía incumplimiento del contrato.

Por último, el vendedor sostuvo que el comprador había reparado la mercadería en su fábrica. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 46 3) de la CIM, el comprador puede exigir al vendedor que repare los defectos de la mercadería, si bien esta petición debe formularse en el momento en que el comprador descubre la falta de conformidad de la mercadería o dentro de un plazo razonable. Puesto que el comprador no hizo la notificación requerida, perdió el derecho al reembolso de los gastos de reparación.

El Tribunal Arbitral determinó que la CIM constituía el derecho aplicable, puesto que tanto China como Alemania eran Estados contratantes de la Convención.

En lo relativo a la calidad de la mercadería, si bien las partes no habían estipulado una cláusula de inspección, ni habían especificado un lugar o agente para la inspección, el Tribunal Arbitral declaró que el comprador tenía derecho a inspeccionar la mercadería después de recibirla, con arreglo al artículo 38 de la CIM. Además, el Tribunal observó que el vendedor, después de recibir las 17 prendas defectuosas devueltas por el comprador, había confirmado por fax que la mercadería presentaba problemas. La existencia de defectos era, pues, un hecho confirmado por ambas partes.

El Tribunal Arbitral observó que, si bien el comprador había explicado sus razones para negarse a aceptar la tercera entrega, según la CIM, este argumento no era aceptable. Si el comprador tenía objeciones respecto de la calidad de la mercadería debería haber planteado la cuestión iniciando una acción judicial, pero no podía negarse a aceptar la entrega. Por consiguiente, la negativa del comprador constituía incumplimiento del contrato. En vista de que el vendedor ya había aceptado la mercadería devuelta, el Tribunal decidió que el comprador no estaba obligado a pagar el precio de esa mercadería, pero sí era responsable de los gastos de transporte e intereses conexos. El Tribunal Arbitral confirmó el derecho del vendedor a cobrarse la diferencia entre el transporte aéreo y el marítimo, puesto que así lo habían acordado ambas partes antes de la entrega de la mercadería.

En cuanto a la pretensión del comprador de que se le pagasen los gastos de reparación de los defectos de la mercadería, el Tribunal determinó que el comprador había reparado la mercadería a un costo razonable y la había revendido al mismo precio previsto en el contrato. Sin embargo, debería haber notificado al vendedor, especialmente en cuanto a los gastos que supondría la operación. Por consiguiente, el comprador no había cumplido debidamente su obligación de reducir las pérdidas y debía hacerse cargo del 30% de los gastos de reparación. En cuanto a la mercadería defectuosa inspeccionada y que no se había vendido, el Tribunal decidió que el comprador no estaba obligado a pagar su precio y que el vendedor debía correr con los gastos efectuados en Alemania, incluidos los de transporte, traslado y almacenamiento, más el 20% del precio del contrato por concepto de lucro cesante derivado de los defectos de la mercadería.

Por último, el comprador debía pagar el precio de la mercadería vendida. En cuanto a las pretensiones del comprador relativas a la pérdida de clientes, descuentos y pedidos, el Tribunal Arbitral consideró que dicha pérdida no era previsible para el

vendedor en el momento de celebrarse el contrato (artículo 74 de la CIM), y, por consiguiente, debían ser desestimadas.

Caso 1169: CIM [1; 35]; 53; 74; [78]

República Popular China: China International Economic & Trade Arbitration Commission [CIETAC]

26 de noviembre de 1998

Original en chino

Publicado en inglés: <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981126cl.html>

Resumen preparado por Aaron Bogatin

Un comprador alemán y un vendedor chino celebraron un contrato para la compraventa de guantes de cuero. El contrato estipulaba la forma en que debía embalsarse la mercadería, incluidos el número y peso de las balas, y su entrega CIF (costo, seguro, flete) en Hamburgo (Alemania).

Durante el cumplimiento del contrato surgió una controversia respecto de ciertas modificaciones del acuerdo original, el espesor del cuero, el peso de las balas y el pago de la mercadería.

El vendedor sostuvo que el contrato original se había modificado, de manera que se había ajustado el peso de las balas y el contrato se había convertido en un contrato de venta sobre muestra. El comprador planteó objeciones respecto del peso de las balas (que guardaba relación con el espesor del cuero) así como de la calidad de la mercadería entregada. Pese a la afirmación del vendedor de que había ofrecido varias opciones al comprador para reducir los daños y perjuicios y resolver el problema, el comprador optó por revender la mercadería a un tercero por un precio inferior. El comprador declaró que, después de revender la mercadería, había pagado al vendedor cierta suma por concepto de la mercadería vendida.

El Tribunal Arbitral decidió que, puesto que las partes tenían sus establecimientos en Estados contratantes de la CIM, el contrato debía regirse por la Convención.

En cuanto al fondo, el Tribunal decidió que, al no efectuar el pago de la mercadería según lo estipulado en el contrato, el comprador no había cumplido con lo dispuesto en el artículo 53 de la CIM. Según el Tribunal, el comprador no había presentado ninguna prueba de que hubiera pagado el precio efectivo de la mercadería al vendedor, quien negó haber recibido suma alguna. El Tribunal observó asimismo que, si bien el comprador no había presentado un certificado de inspección que demostrara los defectos de la mercadería, el vendedor había estado de acuerdo en cambiarla, prometiendo hacerse cargo de los gastos. Refiriéndose a las declaraciones formuladas por las partes, el Tribunal estimó que la mercadería adolecía de defectos; en consecuencia, era razonable revenderla a un precio inferior. Después de efectuar los ajustes necesarios para tener en cuenta los defectos de la calidad de la mercadería, el Tribunal determinó que el comprador estaba obligado a pagar el 70% del precio del contrato.

El Tribunal denegó la petición del vendedor de que se le reembolsaran los intereses bancarios, por considerar que “la pérdida de intereses bancarios no era previsible para el comprador; por consiguiente, su pago corresponde al vendedor”.

Caso 1170: [1; 6]; 11; [12]; 29; 45; 49; 74; [79 2]; 96]

República Popular China: China International Economic & Trade Arbitration Commission [CIETAC]

31 de diciembre de 1997

Original en chino

Publicado en chino: Zhong Guo Guo Ji Jing Ji Mao Yi Zhong Cai Wei Yuan Hui Cai Jue Shu Hui Bian [Recopilación de laudos arbitrales de la CIETAC] (mayo de 2004) vol. 1997, págs. 2885 a 2889

Publicado en inglés: <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/971231c1.html>

Resumen preparado por MAA-Meihua Xu

Un comprador francés concertó un contrato con un vendedor chino para la compra de Lindane por la cual pagaría con una carta de crédito. Después de celebrado el contrato, el comprador emitió la carta de crédito según lo convenido; sin embargo, el vendedor pidió al comprador que la modificara tres veces (cosa que hizo el comprador) antes de la primera entrega de 18 toneladas de mercadería. A continuación, el comprador pidió al vendedor que le entregara las 54 toneladas restantes; el vendedor estuvo de acuerdo pero pidió un aumento del precio original. El comprador aceptó la petición y modificó la carta de crédito una cuarta vez, pero el vendedor no entregó la mercadería restante.

El comprador afirmó que puesto que China y Francia eran Estados contratantes de la CIM, y las partes no habían excluido la aplicabilidad de la Convención, debía aplicarse la CIM. Con arreglo a la Convención y a las cláusulas pertinentes del contrato, el vendedor había incurrido en incumplimiento esencial del contrato al no entregar las mercaderías restantes. Por consiguiente, se justificaban el derecho del comprador a declarar resuelto el contrato después de vencido el plazo para la carga y su petición de pago de daños y perjuicios. Estos incluían la suma reclamada por su propio cliente por no habérsele entregado la mercadería restante y otros gastos que había efectuado el comprador para emitir y modificar las cartas de crédito, además de los derechos de aduana y gastos de transporte.

El vendedor adujo por su parte que en el curso del cumplimiento del contrato, debido a un error de producción, el proveedor del vendedor dejó de producir la mercadería, circunstancia ajena a la voluntad del vendedor, que debía considerarse, por tanto, un caso de fuerza mayor. Después de efectuada la primera entrega de la mercadería, el contrato ya no podía cumplirse y el comprador no planteó ninguna objeción al respecto, lo cual indicaba que el comprador convenía tácitamente en rescindir el contrato original. De este modo, las partes llegaron a un nuevo acuerdo tanto respecto del precio del contrato como del puerto de destino que, no obstante, no se convirtió en un nuevo contrato debido a que el comprador no firmó el contrato enviado por el vendedor. Este nuevo acuerdo no guardaba relación jurídica alguna con el contrato original y nunca entró en vigor debido a la conducta del comprador.

El Tribunal Arbitral determinó que la CIM era aplicable: tal como afirmaba el comprador, los establecimientos de las partes estaban en Estados contratantes de la CIM y las partes no habían estipulado que se excluyera la Convención.

El Tribunal Arbitral observó que, después de la primera entrega, el vendedor había pedido el pago de un precio más alto por la mercadería restante, y que el comprador había estado de acuerdo. El comprador también modificó la carta de crédito conforme a lo solicitado por el vendedor. Eso demostraba que las dos partes estaban

negociando la entrega de las 54 toneladas de mercadería restantes. Las partes convinieron así en establecer nuevas condiciones tanto para el precio como para la entrega. Estos cambios eran enmiendas del contrato original, pero no creaban un contrato nuevo.

Además, el Tribunal Arbitral observó que China, en el momento de ratificar la Convención, había denunciado los artículos 11 y 29, según los cuales la formación, modificación y extinción de un contrato no tendrá que celebrarse ni probarse por escrito. Por consiguiente, el contrato debía concertarse por escrito. El Tribunal Arbitral afirmó que el vendedor no había presentado las pruebas pertinentes de que las partes hubieran concertado un nuevo acuerdo; por consiguiente, el vendedor seguía estando obligado a entregar la mercadería restante según lo estipulado en el contrato original. La falta de entrega por parte del vendedor constituía por tanto un incumplimiento esencial del contrato y, de conformidad con los artículos 45 y 49 de la CIM, el comprador tenía derecho a declarar resuelto el contrato y exigir la indemnización de los daños y perjuicios.

Con arreglo a los artículos 45 y 74 de la CIM, el Tribunal Arbitral aceptó la pretensión del comprador de que se le indemnizara por los daños y perjuicios reclamados por su propio cliente por las 54 toneladas de mercadería no entregada y por concepto de la comisión de emisión de la carta de crédito y su enmienda, en vista de que esos gastos se debían directamente al hecho de que el vendedor no hubiera entregado la mercadería, hecho previsible para el vendedor al concertarse el contrato. Sin embargo, la pretensión del comprador de que se le reembolsaran los derechos de aduana y los gastos de transporte y de comunicaciones fue denegada por tratarse de gastos habituales en las operaciones comerciales que no guardaban relación con los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato por el vendedor.